



Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

///nos Aires, 30 de abril de 2025.-

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I.- Interviene el Tribunal en la apelación interpuesta por las defensas de H. D. García, C. A. Calveira, C. R. Albornoz, O. O. Flores, J. G. Ibars, J. M. Peña, O. J. Faria, L. Cardozo, L. Maciel, R. A. Dell Oeste, A. A. Da Silva, F. N. Palacios, L. A. Suárez, A. J. Ayala, M. C. Solar, J. M. Aguilar Vargas, O. Llanes, M. Ríos, G. González, R. R. Mereles, A. Cardozo, V. Casco, J. Coria, M. López, D. Martínez, M. Loto y A. A. Cristaldo contra el punto I del auto que el 29 de noviembre de 2024 los procesó en orden al delito de imposición de torturas a detenidos por su condición de funcionarios públicos. En el caso de A. Ayala esa calificación concurre a su vez con el delito de amenazas coactivas en calidad de autor.

También recurrieron el punto II de la misma decisión en cuanto ordenó trabar embargo hasta cubrir (...) pesos (\$...), a excepción de la defensa de C. R. Albornoz.

En el día de ayer se celebró, de manera presencial en los estrados de la Sala, la audiencia prevista en el artículo 454 del ordenamiento ritual a la concurrieron todos los apelantes a sostener sus agravios, a excepción de la defensa de J. M. Peña, pese a estar debidamente notificada, por lo que su recurso será declarado desierto. Tampoco se hicieron presentes el acusador público ni el privado.

II.- Se atribuye a los nombrados su participación “*como personal integrante del Servicio Penitenciario Federal, en el suceso acontecido con fecha 16 de febrero de 2013 en el Módulo V del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Devoto-*”.

A fin de puntualizar sobre la cuestión ha de destacarse que con anterioridad a la fecha antedicha el Subprefecto A. J. Ayala, quien en ese momento se encontraba a cargo de la Dirección del citado Módulo V, habría hecho saber a distintos internos que las denominadas “visitas masculinas” -las que hasta ese momento se realizaban en los alojamientos comunes- comenzarían a realizarse en los patios de recreo externo.

La situación descripta generó el malestar de la población penitenciaria allí alojada, dado que no todos los pabellones cuentan con patios y se deberían turnar para su uso, agregándose a ello que a su criterio los patios de recreo externo carecían de las comodidades necesarias para las visitas, toda vez que no poseían por ejemplo reparos contra el sol en esa época del año, entre otras circunstancias, lo que los llevó a intentar una negociación con el Subprefecto A. J. Ayala, en primer término, así como a la interposición de varios recursos de Habeas Corpus con posterioridad, acarreando ello como consecuencia que el nombrado A. J. Ayala desistiera del cambio de régimen que había impulsado en un primer momento.

No obstante, con posterioridad y en uso de sus facultades, el Subprefecto A. J. Ayala emitió un memorando para conocimiento de la población penal, en el que con apoyatura en el artículo 15 del Decreto 1136/1997 (Las visitas no se realizarán en el alojamiento del interno con excepción de las instalaciones hospitalarias, de no mediar contraindicación médica) dispuso expresamente que “...a partir del día 16/02/2.013, que la visita masculina que se venía realizando de los ajamientos comunes, se realizará en los patios de visita (patio de recreo externo).-...” (conf. documentación reservada en Secretaría).

La circunstancia reseñada precedentemente, luego de ser puesta en conocimiento por distintos medios a los internos, generó que éstos comenzaran una protesta, aproximadamente a partir de las 13:30 horas del día 16 de febrero de 2013, asegurándose la reja de



Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

acceso al Celular del Módulo con ropas, otros elementos y colchones, siendo éstos últimos prendidos fuego por internos que no fueron individualizados.

En consecuencia, se hizo presente en el lugar el Subprefecto A. J. Ayala, quien comenzó a proferir frases tales como que “si no desataban la reja, iba a haber palo y escopetazo para todos”, “acá se hace lo que yo digo, acá mando yo, ustedes son presos y las normas las pongo yo”, “si no quieren hacer lo que yo digo, entro con la requisa”, “ahora vengo y los hago bajar” y “ahora prepárense que los voy a sacar yo”.

Seguidamente, y siendo entre las 14:30 y las 15:00 horas, el personal del Servicio Penitenciario Federal procedió a desconectar el servicio de luz y teléfono del Celular, luego de lo cual comenzaron un operativo de represión en el marco del cual arrojaron agua con mangueras al tiempo que efectuaron varios disparos con balas de goma, situación que se habría prolongado en principio durante dos horas, hasta conseguir el ingreso al Celular.

Sin perjuicio de ello, y ya una vez en el interior, el personal del Servicio Penitenciario Federal que participaba del operativo continuó efectuando disparos y aplicando golpes con palos, puntapiés y de puño contra los internos, ordenándoles mediante gritos que se dirigieran hacia el fondo del Celular, donde luego los obligaron a tirarse al suelo, debiendo éstos en consecuencia formar una “montaña humana”, atento al reducido espacio.

Continuando con su accionar, el personal del Servicio Penitenciario Federal que ingresó continuó aplicando golpes y disparos con postas de goma a quienes miraban, efectuándoles luego una requisa de cuerpo a cada uno, consistente en hacerlos ponerse de pie de a uno, desvestirse para corroborar si poseían lesiones o elementos ocultos, y luego tomar sus prendas y obligarlos a dirigirse a un recinto de seis metros por seis metros aproximadamente, denominado “Palito”, ubicado en la parte delantera del Celular, debiendo destacarse que se había formado una especie de pasillo integrado por quienes participaban del operativo, por el cual los

internos debían caminar en dirección al mentado recinto, recibiendo en el trayecto algunos golpes del personal de requisa al pasar.

Amontonados los internos en el interior del recinto denominado “Palito”, fueron obligados a permanecer de pié, mirando hacia la pared y con las manos a su espalda, siendo golpeados incluso cuando hablaban, apartándose a los lesionados y remitiéndolos al Hospital del Complejo en primer término, y luego a algunos a dependencias extramuros debido a la gravedad de sus lesiones, siendo por último los internos mencionados obligados a rubricar actas en las que reconocían haberse lesionado por cuestiones totalmente ajenas a lo acontecido (“Me golpeé con la cama de mi celda”, “Me caí por culpa del agua”, “Me caí en la ducha”, entre otros) tal como se desprende de las actas obrantes a fs. 170/207, bajo apercibimiento de ser trasladados del Celular, Módulo y Complejo en el que se encontraban en caso de no rubricarlas.

Los hechos que fueran descriptos con anterioridad generaron varias denuncias, tanto por parte del propio director del Servicio Penitenciario Federal, así como de parte de integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, las que dieron origen a estas actuaciones.

III.- Tras más de 12 años de la ocurrencia del hecho materia de investigación, corresponde hacer un breve repaso del curso de las actuaciones.

El 7 de abril de 2016 el entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 34, solicitó se reciba declaración indagatoria a los imputados, lo cual la jueza proveyó favorablemente el 11 de mayo siguiente.

El 4 de noviembre de 2016, tras concretarse esos actos, resolvió que no había mérito suficiente como para procesar o sobreseer a los acusados y devolvió las actuaciones a la fiscalía en los términos del artículo 196 del C.P.P.N.

El 7 de abril de 2017 el fiscal postuló su sobreseimiento que fue dictado el 22 de mayo de ese año por la magistrada.

A instancias del recurso presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación como querellante, esta Sala con voto



Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

conjunto de los jueces Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich confirmó el 14 de julio de 2017 el temperamento desincriminante.

Ante una nueva impugnación del acusador privado, el 20 de abril de 2022 la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la resolución revisada y remitió las actuaciones al juzgado de radicación para continuar la investigación. Para ello, ponderó que se había realizado un análisis fragmentado de la secuencia de los hechos, abarcando exclusivamente el primer tramo relacionado con el enfrentamiento entre los internos y los agentes penitenciarios, dejando de lado lo que vino después una vez reestablecido el orden.

Recibida la causa en la instancia anterior, se requirió a los hospitales las historias clínicas de las víctimas; se encomendó al Departamento Scopométrico de la Policía de la Ciudad un examen sobre las filmaciones del hecho tendiente a identificar a los partícipes, el cual fue infructuoso por la calidad de las imágenes; y se solicitó al Cuerpo Médico Forense, con la participación de peritos de parte, determinar entidad y modo de producción de las heridas constatadas en los damnificados.

Cumplido ello, el 29 de noviembre de 2024 la jueza adoptó la resolución que en esta oportunidad nos convoca a partir de las críticas realizadas por las defensas, cuyos agravios a continuación se detallan.

IV.- El Dr. Christian Alberto González, que asiste a A. Cardozo, V. Casco, J. Coria, M. López, D. Martínez y M. Loto, sostuvo en primer término que ninguno de los seis estuvo en el lugar. Cardozo estaba apostado en el Puesto de Control Fijo “*Centro de Vigilancia*”; Coria cumplía funciones en el Puesto de Control Fijo “*Sala de Abogados*”; Casco lo hacía en el Puesto de Control Fijo “*Reja Intermedia*”; Loto en el Puesto de Control Fijo “*Reja 4*” ubicado a la altura de la capilla, a unos 70 metros del lugar de los hechos; Martínez, en el Puesto de Control Fijo “*Reja paquete y visitas*”; y López en el Puesto de Control Fijo “*HPC*” ubicado en el hospital del penal, el cual se encuentra a 250 metros.

También señaló diferencias en las observaciones fílmicas, en tanto las agresiones de los internos hacia el personal penitenciario que intentaba disuadirlos, generó el enfrentamiento. Aclaró que la “*pila humana*” que se observa a los 19:20 minutos del video en realidad es provocada por los internos que se suben unos arriba de otros para ocultar objetos cortopunzantes. Destacó que al minuto 27 un agente del S.P.F. le quita una faca a los detenidos y que la patada que se ve del lado derecho de la imagen a los 27:23 minutos la aplicaría un agente intentando separar a un detenido de su cuerpo con el pie.

Por otra parte, dijo que la decisión era arbitraria, en tanto se tenía por probada la presencia de los imputados en el sitio cuando el libro de novedades de la división control y registros demostraban su ajenidad.

Por último, criticó a la jueza porque había demostrado un denodado respeto por las garantías de quienes permanecen privados de su libertad, pero no observó idéntico esfuerzo para respecto de sus defendidos.

En relación al monto del embargo, que estimó elevado, alegó falta de ponderación de la situación económica de sus asistidos, que eran sostén de familia, destacando que solo se hicieron referencias genéricas para arribar a la suma cuestionada.

Por su parte, el Dr. Sebastián Eduardo Clemente, a cargo de la asistencia técnica de G. González y R. Mereles; la Dra. Hemilce Cecilia Yagi, en representación de J. M. Aguilar Vargas, O. Llanes y M. Ríos; el Dr. Lucas Emanuel Ávalos, por Fe. N. Palacios y P. L. Suárez; la Dra. Silvina Macarena Duarte, en nombre de R. A. Dell Oste y A. Da Silva; el Dr. Emilio David Cucarese, defensor de L. Cardozo y L. Maciel; y el Dr. Carlos Marchese, por entonces a cargo de la asistencia de H. D. García y C. A. Calveira, llamativamente presentaron el mismo recurso pero solo modificaron los nombres.

Y no es el supuesto en el que al existir identidad de agravios y conjunción de pretensiones resulta lógico que los escritos



Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

guarden similitud y transiten los mismos caminos, sino que se tratan de una grosera copia no solo en su contenido sino en su forma, por lo que para evitar repeticiones ociosas se reseñarán de manera genérica y sintética, pues por tal condición no merecen un tratamiento de mayor precisión.

Así, tacharon de arbitrariedad la resolución en tanto no atiende los descargos ni describe la conducta que desarrolló cada uno, a los que entonces se responsabilizó de manera genérica y solidaria a todo el personal penitenciario procesado, cuando la única motivación fue el testimonio -por cierto impreciso y contradictorio- de las víctimas y una conjetura del caso pero sin sustento legal.

Indicaron que no se analizó la resistencia activa de los internos, los innumerables contratiempos que adrede realizaban, ni los modos de producción de supuestas lesiones que se achacan. La situación de peligro fue iniciada, gerenciada y culminada por los mismos detenidos, que no cooperaron con el personal. Era necesario recuperar el control de seguridad no solo en pos del restablecimiento de ésta sino fundamentalmente a salvaguardar la integridad psicofísica de los internos y del personal penitenciario.

Remarcaron que solo unos pocos resultaron lesionados -incluso algunos a razón de su propia inconducta- y la mayoría de las heridas fueron leves.

Y la jueza soslayó la gravedad, no ponderó que por casi dos horas se perdió el control de la seguridad interna de la unidad, se iniciaron grandes y dispersos focos de incendio, destrozos de instalaciones y la población penal se encontraba fuertemente armada con armas caseras.

Finalmente, criticaron el monto del embargo en tanto no responde a las pautas del artículo 518 del ordenamiento ritual, ni se ponderó que los imputados son sostén de familia.

Durante el transcurso de la audiencia, con la participación del Dr. John Denis en la defensa de H. García y C. A. Calveira -el resto se mantuvo igual- compartieron esos argumentos.

A su turno, el Dr. Carlos Telleldin resaltó la inexistencia de pruebas que involucren a C. R. Albornoz, dado que en la resolución se lo menciona de manera genérica, sin atribuirle ninguna acción concreta. Sostuvo la arbitrariedad de la “*condena*” por carecer de elementos de cargo basándose en una presunción infundada.

El Dr. Ignacio Mendez Bobbio, defensor de A. J. Ayala y M. C. Solar, explicó que la supuesta orden ilegítima impartida por Ayala, que desató la violencia y coordinada reacción de la población penal, fue legal y dictada dentro del marco de sus atribuciones.

Recordó que todos los internos dieron cuenta del motín y que fue necesaria la intervención del personal de GOAS para extinguir las llamas, suspender la electricidad y poder iniciar la tarea de los agentes de requisa.

Negó prácticas de tortura indicando que, una vez asegurado el orden, se solicitó a los internos que se coloquen en el suelo, pero no que formen una pila humana, aunque si se generó amontonamiento por el escaso espacio físico.

A su juicio el accionar del servicio penitenciario no solo estaba justificado, sino que fue necesario.

Puntualizó que bajo el ropaje de una coautoría funcional se concretó un reproche genérico e indeterminado, dado que no se identificaron autores de hechos puntuales.

Criticó por falta de sus requisitos típicos la asignación del delito de tortura, pues no hubo sufrimiento grave ni lesiones compatibles con ese tipo penal. E incluso los detenidos recibieron enseguida atención médica.

Para finalizar, sostuvo que el embargo era excesivo y no se ajustaba a las constancias de la causa.

El Dr. Rolando Landolfi, defensor de A. A. Cristaldo, O. O. Flores, J. G. Ibars y O. J. Faría, entendió que los internos se sublevaron y actuaron con desmedida violencia y era el deber de los agentes reestablecer el orden.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

Hizo hincapié en que los imputados enfrentaron a un levantamiento ilegal, violento, con armas e injustificado que se prolongó por dos horas. Y no existía otro mecanismo que no fuera el empleado para recuperar el control, más cuando la Ley 24.660 autoriza el uso de la fuerza en el trato con los internos en caso de fuga, evasión o sus tentativas o resistencia a una orden basada en norma legal o reglamentaria (art. 77).

Desde su perspectiva se debió investigar los delitos que cometieron los detenidos al resistirse de forma tan violenta y a los golpes, afirmando que las armas fueron empleadas por la división requisa con efectos disuasivos y apuntadas con balas de goma al aire sin lesionados.

Negó que se los obligara a suscribir documentos en contra de su voluntad o reconocer hechos de su autoría.

Cuestionó los informes médicos elaborados por los profesionales de la Procuración Penitenciaria Nacional, Dr. Tarica y Cukier, por falta de eficacia y por no ser específico.

Máxime cuando los agentes actuaron emplearon la fuerza en su justo límite, sin incurrir en excesos y no ocasionaron lesiones que no fueran producto de su ejercicio regular para reponer la disciplina y el orden.

La calificación resultó claramente excesiva, puesto que las heridas constatadas fueron leves, no se acreditaron lesiones psicológicas, por lo que en su caso debería ser modificada por el delito de apremios ilegales.

Por último, en cuanto a la medida cautelar de carácter económico brindó agravios similares a los de sus colegas.

V.- Todos los intervinientes reconocen que el 16 de febrero de 2013, aproximadamente a las 13:30 horas, los detenidos de los Celulares II y III del Módulo V del Complejo Penitenciario Federal de esta Ciudad, al ser notificados de la resolución dictada por su director A. Ayala, que disponía la modificación del régimen para las visitas masculinas -que pasaba de realizarse en los pabellones comunes al patio de recreo externo-, comenzaron una violenta protesta. Primero ataron las rejas de acceso con sábanas, colocaron

elementos para bloquear el acceso del personal penitenciario y prendieron fuego algunos colchones. Luego, cuando arribaron los integrantes de la requisa, opusieron resistencia arrojando distintos tipos de objetos.

El punto en discusión está centrado entonces en determinar si con posterioridad a ese enfrentamiento y una vez restablecido el orden, el personal penitenciario incurrió en un exceso desmedido en el uso de la fuerza que incluyó prácticas como las denominadas “*punte chino*”, “*pila humana*”, golpes y disparos con balas de goma injustificados.

De ahí que el grueso de los agravios focalizados en la actitud agresiva de los internos para la requisa, lo que necesariamente provocó una defensa proporcional a la situación excepcional que se desató, no es posible atenderlos en tanto no dan respuesta al último tramo de la secuencia en el cual se construye la imputación.

Es que no hay duda que en ocasiones particulares está habilitado el uso de la fuerza proporcional a la ofensa para mantener la seguridad del penal y la integridad física de los detenidos y del personal penitenciario (cfr. a nivel nacional la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad -n° 24.660-, art. 77; Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal -n° 20.416-, art. 33; Protocolo y Manual de Procedimientos para “Intervención frente a alteraciones del orden” -publicado en el Boletín Oficial bajo Resolución n° 238 del 10 de febrero de 2010-. A nivel universal “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” -regla 33-; “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979 -art. 3-; y, particularmente, en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990).



Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

Lo que aquí cabe desentrañar, conforme fuese enmarcado por la Cámara Nacional de Casación Penal, es lo sucedido una vez establecido el orden.

Y aun cuando se comparten ciertas críticas de las defensas, tales como que no se logró identificar el rol de cada imputado y tampoco se pudo observar en los videos lo realmente ocurrido, lo cierto es que carecen de entidad para enervar la intimación y sugieren ocultamiento de lo acaecido para lograr la impunidad.

Pero para comenzar el análisis lo primero que se debe ponderar es el relato de las víctimas que sufrieron las agresiones, pues a partir de allí es factible reconstruir qué sucedió.

J. J. Maturana Larach, E. A. Juárez, A. Ceferino Cervin, D. H. Cabeza, F. R. Gímenez, H. Yoel Alvis González, D. O. Arizo, J. E. González Chávez, P. R. Rodríguez, N. A. Gargano, C. E. Mansilla, C. A. Berón, J. J. Domínguez, M. Silva Salazar, G. E. Martínez, D. E. Criscuolo, O. A. Álvarez Batancourt, V. M. Ruiz Díaz y M. del Re, coincidieron en que tras el motín que efectivamente iniciaron y que incluyó prender fuego colchones y bloquear el ingreso al pabellón, el personal de requisa logró ingresar a los bastonazos y los apilaron en el fondo del lugar uno arriba de otro, donde los continuaron golpeando y reducidos -incluso hubo disparos de bala de goma-. Luego los condujeron a un patio – que por su ubicación lo llaman “*palito*”- asestándole golpes durante el trayecto. Negaron poder reconocer a los autores (cfr. fs. 459, 461, 464, 467, 552, 573, 576, 578, 581, 592, 700, 713, 715, 746, 753, 781, 820, 822, 881 y 887).

Una primera conclusión: estos testimonios parecen espontáneos, guardan equivalencia narrativa, no buscaron perjudicar maliciosamente a nadie; ni siquiera a Ayala que había dado la directiva contra la que se alzaron. Fueron claros en que por la posición en que se ubicaron –acostados boca abajo-, no era posible identificar a los atacantes porque llevaban cascos.

Las heridas fueron constatadas por los Dres. Alberto Tarica y Diego Cukier integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, adjuntado a sus informes fotos ilustrativas de los internos (cfr. fs. 22/35 y 46/76).

Lo importante de aquéllas lesiones, más allá del carácter leve que destacan las defensas, es que en su gran mayoría fueron halladas en la parte de atrás del cuero cabelludo y en espalda, por la zona de los omóplatos (cfr. fs. 25, 27, 31, 46, 53, 57, 66), lo cual robustece la idea de que se produjeron cuando estaban ya reducidos y acostados boca abajo, o incluso en el trayecto que realizaron por medio del “*punte chino*” hasta llegar al “*Palito*”.

La última medida que se completó previo al dictado del auto de mérito en examen fue el resultado de los peritajes realizados por el Cuerpo Médico Forense de la Nación.

Para ello se examinó a E. Mahia, J. Domínguez, V. M. Ruíz Díaz, G. E. Martínez, C. Emmanuel Mansilla, R. Falcón, R. F. Giménez, E. A. Juárez, M. A. Bravo Acuña, S. Salvo, C. A. Berón, J. Maturana, M. Agüero, O. Arapa Mogrovejo, L. L. de la Riva –se destaca lesión en mano derecha por proyectil–, D. O. Ariza, H. Y. Alvis González, J. E. González Chávez, N. A. Gargano, D. E. Criscuolo, J. F. Olivera, R. Cabrera, M. Silva Salazar, P. R. Rodríguez, O. A. Álvarez Betancurt, D. Leal, D. H. Cabeza, J. A. Alvines y Al. C. Cervini.

Sus conclusiones coinciden en la ubicación de la gran mayoría de las heridas, agregando que su posibilidad de curación fue menor a 30 días, reconociendo como mecanismo de producción un golpe o choque contra cuerpo duro y/o romo.

Este repaso desecha dos agravios de los recurrentes, pues en líneas generales ya no existe la imprecisión señalada respecto a los informes iniciales ni tampoco se puede aseverar que pocas personas resultaron lastimadas, pues al menos se evaluaron clínicamente casi 30 hombres.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

En contrapartida, las actas que se aportaron desde el servicio penitenciario para explicar los golpes no tienen seriedad y solo procuran consolidarse como un burdo enmascaramiento. Basta repasar que en ellas los internos consignaron “*me caí*”, “*me resbalé en la ducha*”, “*me golpeé con la cama de la celda*”, (cfr. fs. 170/207). Es una quimera pensar que eso pudo ser cierto.

Otra prueba trascendental son las imágenes obtenidas del día del incidente, principalmente por lo que muestran; pero también por lo que esconden.

En el CD 1 M2U01622-1 se observa el pabellón II con sábanas sobre las rejas de ingreso, objetos que arrojan los internos al personal penitenciario que aguarda afuera, gritos e insultos. Enseguida los bomberos comienzan a lanzar agua y se corta la luz (minuto 3:30). Ingresan el personal de requisa, se escuchan disparos con municiones de goma, los detenidos son trasladados hacia el fondo, la situación queda controlada y se retiran al pabellón III (entre el minuto 21:00 al 26:00). En este sitio la resistencia es superior, arrojando todo tipo de objetos al personal de la requisa que desde la puerta de ingreso -pero sin entrar- responde utilizando escopeta y así culmina la grabación.

La continuación de la secuencia se ve en el CD2 M2U01623-1: se mantiene el enfrentamiento hasta el ingreso del personal penitenciario mediante el disparo de balas de goma (minuto 13:11). Logran de esa forma calmar a los detenidos en el fondo del pabellón (minuto 14:55). Aun con la situación controlada y los internos tirados boca abajo en el piso se siguen escuchando deflagraciones (minuto 15:40 y 15:50). Un uniformado golpea con el bastón a un detenido y otro recibe una patada en el piso (minuto 16:40). En un movimiento de la cámara se logra ver parte de la “*pila humana*” (minuto 19:10) y luego como un penitenciario camina pisando la espalda de algún detenido (minuto 20:43). Culmina la grabación con los internos parados contra la pared y yendo de a uno hacia otro sitio.

En el CD2M2U01624-1 y durante ese traslado, un detenido cae al piso y es asistido por un compañero para continuar la marcha (minuto 3:45).

Las imágenes conducen a ciertas reflexiones.

Por un lado respaldan parcialmente los comentarios de los damnificados en cuanto a que hubo golpes cuando había cesado la hostilidad. También que se los obligó a un amontonamiento innecesario, derivando en la llamada “*pila humana*” y finalmente en un traslado a otro sitio, presumiblemente el llamado “*Palito*”. Por otro, corroboran que los penitenciarios ingresaron con cascos, sin individualización visible en el uniforme para evitar su identificación.

Pero lo más llamativo, es que no se filmó donde fueron trasladados los detenidos, ni tampoco el recorrido que hicieron, seguramente porque en esa oportunidad recibieron golpes en la modalidad de “*punte chino*”, claramente descripto por las víctimas, a lo que se aduna el tipo de lesión constatadas y el recorte sin duda adrede de la filmación que en su último tramo mantuvo la cámara siempre apuntando hacia un mismo espacio, brindando así una imagen casi estática para ocultar lo que en verdad estaba ocurriendo.

La conjunción de los elementos objetivos reseñados, más su ponderación a la luz de la sana crítica, impone que la causa sea elevada a juicio respecto a todos los imputados pues lejos estamos del estado de certeza negativa requerido para adoptar el temperamento propiciado por los recurrentes. Todo lo contrario, se advierte una acción mancomunada y coordinada con reparto de tareas, distintas pero complementarias: mientras un importante grupo ingresó al pabellón y redujo a los detenidos, otro formó parte del “*punte chino*” y seguramente uno más los aguardaba en “*Palito*” para continuar con la agresión. Y esa asignación de roles se deduce, incluso, a la hora de frustrar cualquier tipo de reconocimiento al no tener ninguna identificación, sumando una filmación “*a medias*” de lo ocurrido, lo que descarta la crítica de la defensa de C. R. Albornoz en cuanto a que se trató de un simple camarógrafo; todos actuaron de consuno.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

Por eso, será en un eventual debate, con un marco más amplio de discusión, donde las partes con base en los principios de oralidad, inmediatez, contradicción y concentración, podrán reencausar sus cuestionamientos pues en esta instancia lucen insuficientes para rebatir la prueba de cargo.

Sentado ello, solo caben aclarar algunas cuestiones a las defensas.

La hipótesis que unilateralmente introduce el Dr. Christian Alberto Gonzalez en cuanto a que sus defendidos no estaban en el lugar, -ya que el resto de las partes no negó su presencia- carece de asidero, pues ni siquiera sus representados la acompañaron, por cuanto declararon con detalle cómo fue el enfrentamiento, a su juicio justificado y necesario, que se gestó en razón del motín (cfr. fs. 1171/1190, 1191/1210, 1238/1257, 1270/1290, 1291/1311, 1404/1424).

Por otra parte quedó ampliamente demostrado que la decisión bajo estudio cumple con los parámetros de fundamentación establecidos en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que se impone descartar la tacha de arbitrariedad dado que no se observan fallas lógicas en el razonamiento o aseveraciones infundadas.

“Motivar” significa “(...) consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo (...)” (D’ ALBORA, Francisco J., *Código Procesal Penal de la Nación*, anotado, comentado y concordado, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2012, pág. 223); todo lo cual se encuentra plenamente satisfecho en la pieza procesal en estudio.

En definitiva, lo que subyace tras las críticas no es más que un disenso con la cuestión de fondo que se encuentra superada.

Por último, los planteos dirigidos contra la calificación legal no serán atendidos, en la medida en que resulta provisoria en la instancia y los recurrentes no han demostrado –ni siquiera alegado–

que su posible modificación tenga incidencia en algún otro instituto que conduzca a examinar la cuestión.

VI.- En relación al embargo, el monto dispuesto respeta las pautas de mensuración que establece el artículo 518 del C.P.P.N. para su dictado y se encuentra correctamente motivado en la resolución impugnada. Máxime cuando el agravio presentado por las partes no puede ser atendido, desde que su cuantificación nada tiene que ver con la situación económica de los imputados.

En consecuencia, y sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda (art. 401 CPPN), el Tribunal

RESUELVE:

I. DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación introducido por la defensa de J. M. Peña (art. 454 del CPPN)

II. CONFIRMAR el auto del 29 de noviembre de 2024 en todo cuanto fue materia de recurso.

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota.

Se deja constancia que el juez Ignacio Rodríguez Varela, interviene como subrogante de la Vocalía n° 9 de esta Cámara, en tanto la jueza Magdalena Laíño no lo hace en función del artículo 24 bis CPPN.

Julio Marcelo Lucini

Ignacio Rodríguez Varela

Ante mí:

Ramiro Ariel Mariño
Secretario de Cámara